

DIARIO DE LA MAÑANA
ADMINISTRACION
5-Iluminación-5
SUSCRIPCION
Pago adelantado
Por un mes..... Bs. 1.50
" trimestre... " 4.50
" semestre... " 9.00
" un año..... " 16.00

ELDIARIO

DIRECCION
5-Iluminación-5
De 8 a. m. a 5 p. m.
DIRECCION TELEGRAFICA
"Diario" La Paz
Cajilla de correo 144
Teléfono N° 188

THE BOLIVIAN INCA MINING Co.

Oficina central calle del comercio N°. frente al Gran Hotel Guibert, Gasilla N°. 472, Teléfono 271

NEGOCIOS MINEROS. MAQUINAS Y MATERIALES PARA MINAS.

Rescate de Barrillas

La Empresa cuenta con laboratorios propios para ensayes.

ARTHUR POSNANSKY

DIRECTOR GERENTE.

COMPANIA DE SEGUROS "LA URBANA"

Calle de Comercio No. 9 Apartado No. 344.

SUCURSAL en La Paz

CAPITAL
SUSCRITO
RESERVAS ACUMULADAS

Libras 200,000.000
" 100,000.000
" 11,623.528

OFICINA CENTRAL: LIMA-PERU.

Autorizado por resolución Suprema de 8 de agosto de 1904, tiene existencia legal en toda la República.
La Compañía tiene ya invertido en Letras Hipotecarias y depositadas a la orden del Gobierno, el 40 por ciento del valor de los premios percibidos hasta la fecha.

Seguro Mutuo sobre la Vida. Emite pólizas hasta por libras 500, con pagos sumamente reducidos, que se pagan al fallecimiento de todos.

Seguro contra incendio. Se asegura, mercaderías, muebles y edificios a los tipos siguientes en plaza.

Seguro Marítimo. Sobre mercaderías en general, por vapor o buque de vela, para todas partes del mundo. Pólizas flotantes para importación que han tomado gran impulso debido a las facilidades que tienen los comerciantes para hacerlos, evitando las demoras que originan los seguros en Europa.

JUNTA DE VIGILANCIA

Carlos Benavides
Pascual Cesarino
Carlos R. Flores

Carlos Flores Quintela
Gmo: A. Harmsen
Benedicto Goyti

J F. Camino

ADMINISTRADOR.

remate, siendo los siguientes remates publicados por la prensa, con la profusión que se ha hecho en el presente caso.

50. Repito que todos estos alegatos han sido ya discutidos y debidos antes del auto de casación que declara no ser motivos de nulidad para reponer este proceso; auto que tiene la fuerza de cosa juzgada, según el artículo 825 del Procedimiento Civil.

Ingresemos señores ministros a un punto que es uno de los principales alegatos de la parte contraria.

Dicen que han pagado la deuda y que habiendo terminado el litigio debe quedar anulado el remate por ése solo hecho y archivados los obrados.

Esto es completamente falso; pues un remate consumado es un perfecto contrato de venta que se rige por el artículo 1004 del Código Civil; la aprobación es una simple diligencia ó un procedimiento de forma que no atañe en ningún caso al fondo mismo del contrato. A este respecto la Corte Suprema dice lo que sigue, estableciendo jurisprudencia: "Considerando que las diligencias de aprobación, otorgamiento de escritura y demás no significan otra cosa que la homologación del auto, siempre que el procedimiento no adolezca de ningún vicio, así como la autenticación del título constitutivo del derecho, que en tal concepto, hallándose formalmente consumada la venta antes de la aprobación judicial, no puede considerarse autorizado el comprador para desistir alegando no hallarse aprobado el remate."

Otro auto de la Corte Suprema citado en el escrito de la parte contraria y que corre a fojas 135, dice lo siguiente: "Vistos los artículos 485, 589 y 493 y considerando que el último de estos artículos prohibiendo la apertura de la almoneda y las pujas, después de hecho el remate no se refiere al auto de la aprobación como se supone sino al acto mismo de la subasta que según los artículos 488 y 489 terminó con la aceptación de la mejor postura y la entrega de la diligencia que se firma el mismo día por el juez, el rematador y el secretario: lo que habiendo pro edicto al remate a la hora señalada y habiéndose aceptado la propuesta de Zamora en defecto de otro que le haga competencia, sentándose la respectiva acta quedó perfeccionada la venta, siendo inadmisibles conforme el artículo 493 la apertura de la almoneda y las pujas. G. J. N. 533 p. 11 auto de 13 de agosto de 1892."

Otro auto de julio 5 de 1899 dice lo que sigue:

"Considerando: que tramitada en debida forma la ejecución entablada por Lucía Mercado contra sus deudores Mariano de la Cruz Revilla y Natalia Dávalos, se adjudicó a la acreedora á falta de postores la finca embargada é hipoteca la especialmente al crédito mediante pronunciamiento judicial, que quedó ejecutoria entre las partes que intervinieron en el juicio. Que semejante acto judicial que importaba traslación de dominio legítimamente consumado, no ha podido desvirtuarse por solicitudes de nueva subasta, que importan en este caso aperturas ó pujas de un remate perfeccionado, y que están terminantemente prohibidas por la ley. G. J. N. 789 p. 7."

Otro auto de 12 de febrero de 1900 dice:

"Considerando que los ejecutados aceptaron implícitamente la adjudicación verificada en beneficio de la acreedora, por no haber deducido recurso alguno contra el auto que la hizo, habiendo por consiguiente, consentido en esa transferencia de dominio; que al estimarlo así, no han infringido los jueces de grado los artículos 1,004 y 1,005 del Código Civil" G. J. N. 716, p. 18.

A esta jurisprudencia tan uniforme voy á agregar la terminante disposición del artículo único de la ley de 27 de octubre de 1889 que dice: "Quedan abolidas las aperturas en toda clase de remates, quedando definitivamente perfeccionado el contrato con la adjudicación al mejor postor en acto de remate á puja abierta."

El artículo 493 del Procedimiento Civil dice lo mismo y contra estas leyes no es posible destruir un remate consumado y perfeccionado con la buena prós hecha al mejor postor.

El pago puede suspender la ejecución y definir el proceso, solo durante el término de los pregonos, como lo dice expresamente el artículo 486 del Procedimiento Civil; pero el pago verificado después del remate no puede perjudicar los derechos adquiridos por el rematador.

A pesar de la claridad de esta ley, la jurisprudencia de la Corte Suprema, ha establecido en casos concretos lo que sigue:

"Después de la adjudicación, aun antes de la aprobación del remate, no es admisible el pago del deudor, ni una mejor propuesta de otro acreedor distinto del adjudicatario No. 603 pág. 40."

En un caso parecido la corte de Cochabamba, sentó la siguiente doctrina:

"Considerando: que si el comprador de la finca hipotecada y por este el apelante, aun es el supuesto de ser acreedor, gozaron para el pago de la deuda de la Mercado de los planos y términos concedidos al deudor principal, debieron hacerlo en el último término de los pregonos que les acuerda el artículo 486 del Procedimiento Civil, no siéndoles permitido después de la adjudicación que importa remate y no admite apertura, ni pujas, sean las que fueren, según lo dispuesto por el artículo 493 del mismo procedimiento."

La Corte Suprema en auto de julio 5 de 1899, G. J. N. 709 p. 3, apoya en este auto en estos términos: "Considerando, que el auto acusado, al pronunciarse en este sentido y confirmar el rechazo de las indicadas solicitudes del Banco, no ha infringido ninguna de las leyes inconducentemente citadas en el recurso".

Otro auto de 31 de enero de 1895, G. J. N. 658 p. 14, afirma la misma doctrina en estos términos: "Considerando en el deducido á nombre de María Raccura: que no habiéndose interpuesto en tiempo hábil contra el auto de adjudicación de fojas 282 recurso alguno, quedó éste ejecutoriado, como lo ha reconocido el auto de fojas 800, no siendo por tanto admisible el pago posteriormente ofrecido por la deudora á efecto de recobrar el fondo adjudicado, ni atendibles los medios de nulidad con que se pretende abrir el sello de la cosa juzgada, que por lo mismo la preindicada Corte al confirmar las decisiones del inferior que rechazan

dicho pago y ordenan la entrega del inmueble transferido en observancia de los artículos 807, 815 y 457 de la Compilación, no se han infringido ninguna de las leyes que inconducentemente se citan en el recurso".

Otro auto de 14 de marzo de 1900, G. J. N. 717 pág. 2, dice:

"Considerando: que el deudor puede redimir sus bienes de la subasta, pagando la obligación durante el término de los pregonos como lo determina el artículo 486 del Procedimiento Civil, sin serle permitido hacerlo en época posterior: que el ejecutado presentó sus ofertas de pago, después de pronunciado el respectivo auto de adjudicación del inmueble embargado en favor del ejecutante; que habiéndose desestimado dichas ofertas como extemporáneas, no se ha infringido por consiguiente el artículo 849 del Código Civil".

Creo inútil ocurrir á otras citas y queda demostrado que el pago del deudor posterior al remate no puede producir el efecto de recobrar los bienes rematados, ni destruir por tanto una venta pública consumada.

Apoyado en estas leyes y en la uniforme jurisprudencia de nuestra Corte de casación he creído incorrecta la operación verificada por el Crédito Hipotecario.

El hecho de haber rematado una casa hipotecada y conociendo que ese remate subsistía por resolución de la Corte Suprema impedía cancelar el crédito con prescindencia del rematador; su deber era exigir el pago á éste como lo dispone el artículo 58 del decreto supremo de 24 de julio de 1869.

Esta doctrina apoyada en leyes tan terminantes ha sido aplicada por el inferior de una manera correcta en el auto apelado. Agregaré todavía á todo esto el hecho de que el pago verificado por las Verástegui al Crédito Hipotecario no aprovecha ni perjudica á mi poderdante toda vez que los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes, como lo establece el artículo 756 del Código Civil. Además un pago hecho en perjuicio del tercero y con la malicia, manifiesta que se ha verificado éste, es nulo, según lo prescribe el artículo 833 del mismo Código Civil.

La parte contraria dice que mi poderdante no ha pagado hasta la fecha el precio del remate:

Para contestar de una manera incontestable este punto, basta citar el certificado de fojas 192, fecha 13 de febrero de 1906 en que el gerente del Banco Industrial dice que en sus cajas ha tenido y tiene disponible mi poderdante desde el 2 de enero de 1905 los 50,000 Bs., sin que hubiera tocado un solo centavo de ellos, porque existía el giro de fojas 25 á orden y disposición de este juzgado con fecha 8 de enero de 1905; de suerte que es un hecho justificado que el precio de 50,000 Bs. ha estado á disposición del señor juez, desde el tercer día de verificado el repetido remate.

La parte contraria dice: que el cheque de fojas 25 que está en el expediente principal, no es un depósito sino un giro que pudo ó no pagarse; pero el certificado de fojas 192 contradice esa afirmación y manifiesta que efectivamente esa suma íntegra ha permanecido y permanece á disposición del juzgado como pre-

cio del segundo remate desde el 2 de enero de 1905.

Girado ese cheque, la parte contraria interrumpió su pago con los incidentes de nulidad y reposición notificados á mi poderdante el día 8 de enero de 1905, como consta á fs. 24 vta. (expediente principal.) Esta interrupción ha durado hasta el 8 de febrero de 1906, fs. 191 vta. (expediente principal) en que se me notificó con el cumplimiento del auto de la Corte Suprema, que rechaza todos los motivos de nulidad y reposición propuestos de contrario, dejando así válido y firme el segundo remate.

Preveyendo argumentaciones sofisticadas y á mayor abundamiento he presentado todavía otro certificado de depósito por los mismos 50,000 Bs. que corre á fs. 185 (expediente principal), con fecha 6 de febrero de 1906. Es decir, dos días antes de la notificación con el cumplimiento del auto de la Suprema.

Como se vé, la oblación del precio se ha verificado empeñosamente en diversas formas, todas ellas saneadas y satisfactorias. Esa oblación ha sido obstaculizada y destruida por la parte contraria con incidentes de su exclusiva responsabilidad, sin que pueda perjudicar á mi poderdante en ninguna forma.

Curioso sería si se admitiese el sofisticado argumento de que no se ha oblado el precio del remate, cuando ese acto ha sido interrumpido: 1º por los incidentes de reposición que han sido rechazados en el lapso de más de un año; y 2º con el burlesco y malicioso incidente de pretender destruir el remate consumado con un pago al que no ha concurrido mi poderdante, por cuya razón no puede perjudicarlo.

Es evidente que el artículo 53 del decreto supremo de 22 de julio de 1869 ordena que el rematador pague las anualidades al Banco y deposite en poder de la sociedad el exceso del precio.

Precisamente para este efecto se ha depositado á disposición del juzgado el valor total del remate; pero si él no ha ordenado la traslación del depósito al Crédito Hipotecario, ha sido porque la parte contraria ha suspendido esa diligencia final con incidentes que han sido rechazados y que después son repetidos con una insistencia digna de mejor causa. Si estos últimos incidentes se van tramitando, ¿por qué se haría recaer la responsabilidad de la demora á mi poderdante, que no ha suscitado y más bien ha combatido y combatido esos incidentes dilatorios? ¿puede cargar el rematador con las culpas del ejecutado que interrumpe, sin razón ni justicia, la oblación del precio del remate empeñosamente verificada? De ninguna manera. Mi poderdante ha cumplido su deber poniendo á disposición del juzgado el valor total del remate; corresponde al señor juez ordenar la traslación del depósito dentro de los términos y en la forma establecida por el artículo 53 citado.

Así demostrada la efectividad de la oblación del precio de la casa rematada, á pesar de los incidentes de la parte ejecutada, voy á suponer sin consentirle, que faltase esa oblación. Sus efectos no disminuyen, siquiera la firmeza y la validez del remate; y todo lo que debe hacer el juez es ordenarla aun con apremio como lo dispone el artículo 495 del Procedimiento Civil.

En apoyo de esta ley, nuestra Corte Suprema ha dictado varias resoluciones.

El auto de 27 de marzo de 1895, G. J. N. 660, p. 30, dice lo que sigue:

"Considerando: que el hecho de haberse oblado el precio del fundo rematado con posterioridad al término prescrito por el artículo 494 del Procedimiento Civil, no produce la nulidad del remate; que en tal concepto, la oposición deducida no es admisible."

El auto de 6 de marzo de 1890, G. J. N. 600, p. 4, dice:

"Que es deber del juez compeler coactivamente al comprador á la oblación aun con apremio personal."

El artículo 1069 del Código Civil, estatuye que aun existiendo estipulación de que se anule la venta si no se paga el precio en el término convenido, el comprador, mientras no haya sido constituido en mora, puede pagar, sin embargo de haber expirado el término.

Ese requerimiento judicial no ha habido ni puede haber contra un comprador que empeñosamente pone á disposición del juez, el precio total del remate.

Aun en la hipótesis más desfavorable no se puede atacar dicho remate por falta de pago del precio. Mi poderdante ha estado impedido para verificarlo con motivo de los incidentes que ha suscitado y sigue suscitando la parte ejecutada.

No obstante, el precio está pagado y depositado desde el 3 de enero de 1905 en el garantizado Banco Industrial de esta ciudad. Esto consta de documentos fehacientes é incontrovertibles, y el señor juez debe disponer de esa suma con arreglo á las leyes especiales del caso, dejando así establecida sin género de duda la efectividad del pago, que inútilmente se ha pretendido negar.

El remate se ha verificado en puja abierta y habiendo sido su base 6,988 Bs. 43 cts. monto de lo adeudado al Crédito Hipotecario de Bolivia. Su tasación catastral practicada en el año 1902, es de 52,000 Bs. y desde ese año hasta el presente no han puesto mejora alguna; todo lo que manifiesta que los alegatos sobre un remate relativamente bajo son falsos y los ejecutados se hacen ilusiones en esta materia.

Fuera de esto, en el acto del remate se ha leído la reclamación de la señora Vidangos que alega propiedad sobre una parte de la casa, y este gravamen desmejora el precio, habiendo sido la causa del desistimiento verificado por el señor Pinilla. Averiguado el fondo de la reclamación de la Vidangos resulta que existen dos pleitos cuyas soluciones son inciertas. En este sentido, las exageraciones sobre el bajo precio del remate son ilusorias.

Existiendo como existen dos apelaciones de autos interlocutorios que se hallan en estado de resolución en esta misma causa, deben resolverse las dos en un solo auto, como lo disponen los artículos 97 y 761 del Procedimiento Civil, siendo lo más correcto ya que dichos autos corresponden á un solo incidente.

En mérito de lo expuesto, ruego á U. U. se sirvan confirmar el auto apelado, con costas y multa en su máximo, por ser así de justicia, etc.

La Paz, 6 de junio de 1906.

JOSÉ CARRASCO
Abogado
ZENÓN BARBUET
Procurador.